



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

DEMANDANTE:	Yajaira Nuñez Romero
DEMANDADA:	Edwin Alberto Saldarriaga Correa y Luis Carlos Correa García representado por su curador Edwin Alberto Saldarriaga Correa
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Confirma
Radicado	05001-31-05-015-2021-00018-01 (344) 05001310501520210001801

En la ciudad de Medellín, a los diez (10) días de mayo de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en el proceso ordinario laboral adelantado por la señora **Yajaira Nuria Nuñez Romero** en contra de **Edwin Alberto Saldarriaga Correa y Luis Carlos Correa García representado por su curador Edwin Alberto Saldarriaga Correa**, frente a la decisión adoptada por el Juzgado de instancia.

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

1.1. PRETENSIONES.

La señora Yajaira Nuria Núñez Romero formuló demanda ordinaria laboral, buscando que previa declaración de una relación laboral entre las partes, se condene a los demandados al pago de horas extras, cesantías, intereses a las cesantías y su sanción por no pago, primas de servicio, vacaciones, sanción moratoria del artículo 99 numeral 3° de la Ley 50 de 1990, sanción moratoria por despido indirecto indexada, sanción moratoria del artículo 65 del C.S.T. por falta de pago de salarios y prestaciones debidas, o en subsidio la contemplada en el

parágrafo 1° por falta de pago de la seguridad social integral y parafiscales, \$900.000 como indemnización por la falta de dotación de calzado y vestido de labora, indexación de las sumas de dinero que no son compatibles con la indemnización moratoria, y costas del proceso.

1.2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Admitida la demanda, la parte demandada allegó respuesta oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Señalando que es cierto que la demandante cuidó del señor Luis Carlos Correa García, en la casa de familia, y se le pagaba una contribución por sus servicios, sin embargo, no es cierto que se dio en los extremos señalados ya que no fue de manera continua, pero fueron enfáticos en señalar ante la situación ilegal de la demandante en el país, que se encontraban en una imposibilidad de afiliar y pagar la seguridad social, así como las demás prestaciones sociales.

En el acápite de pruebas, solicitaron con el fin de conocer la situación legal de la demandante se oficie a Migración Colombia para que informe que trámites ha realizado ella para legalizar su situación migratoria, desde hace cuánto tiempo y en qué estado se encuentra. Así mismo, solicitó se oficie al Ministerio de trabajo, para que certifique si reposa alguna solicitud de permiso de trabajo, desde hace cuánto tiempo y en qué estado se encuentra.

1.3 DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

En la audiencia de conciliación, de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, realizada el 10 de noviembre de 2022, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, en la etapa de decreto de pruebas, la juez se abstuvo de decretar las pruebas relacionadas con los oficios al Ministerio del Trabajo y Migración Colombia, atendiendo a que el artículo 173 del C.G.P., dispone que «el juez se abstendrá de decretar las pruebas previas», salvo que exista prueba en el expediente.

1.4 RECURSO DE APELACIÓN.

La apoderada de los demandados interpuso recursos de reposición y apelación en contra de la negación de decretar estas dos pruebas, reiterando que, al tratarse de una solicitud de información de una persona, esta no sería suministrada, y solo podría prosperar si la señora juez la solicita directamente a las entidades de Migración y al Ministerio del trabajo. Resalta que es pertinente esa prueba para demostrar los trámites que había adelantado Yajaira, a quien en su momento no se pudo contratar de manera correcta, ya que estaba como inmigrante irregular.

La juez no repuso la decisión, sosteniéndose en los argumentos iniciales y concedió el de apelación.

II. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

2.1. PARTE DEMANDADA.

Presentó alegaciones la apoderada de la parte demandada reiteró los argumentos de la alzada, resaltando que, dado el carácter reservado de la información requerida, solo se puede obtener por el titular o por solicitud de una autoridad judicial, por lo que es claro que, el trámite estaba condenado al fracaso por las políticas de protección de datos, además, por la misma ley donde se reglamenta las situaciones en las cuales se puede obtener información y de qué manera.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si en el presente asunto se debe decretar la práctica de la prueba solicitada por la demandada.

3.2. PREMISAS NORMATIVAS

3.2.1 COMPETENCIA.

La Sala conoce del recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 65 numeral 4° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, toda vez, que se negó la práctica de una prueba.

3.2.2 MEDIOS DE PRUEBA

El artículo 60 del adjetivo laboral y de la seguridad social¹, contiene la regla técnica de la necesidad de la prueba, la que le impone al juez, la obligación de decidir con las oportunas y legalmente allegadas y practicadas.

El artículo 173 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral conforme el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, a su turno establece:

ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. **El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.**

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. (Negrilla de Sala).

Sobre la exequibilidad del artículo 177, en lo que respecta al aparte subrayado, la Corte Constitucional expresó en sentencia C-099 de 2022, en la síntesis de los fundamentos **(Comunicado de Prensa No. 8 del 16 y 17 de marzo de 2022), lo siguiente:**

...realizó un test de proporcionalidad para determinar si las normas acusadas están suficientemente justificadas y sus consecuencias son constitucionalmente admisibles. Encontró que: (i) los contenidos normativos acusados persiguen la realización de importantes principios constitucionales, en tanto se inscriben dentro de las llamadas cargas procesales que aluden a la organización de un proceso judicial con carácter dispositivo, de tal manera que garantice los principios de igualdad de las partes y lealtad procesal, sin afectar los principios de imparcialidad e independencia del juez.

(ii) Los contenidos normativos acusados constituyen un medio adecuado para realizar los principios constitucionales de igualdad toda vez que las cargas procesales que contienen contribuyen con lo propio de manera efectiva ya que su cumplimiento permite organizar el adelantamiento del proceso, de tal manera que éste no resulte caótico.

¹ **ARTICULO 60. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS.** El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo.

(iii) Las normas acusadas no son evidentemente desproporcionadas porque está justificada la afectación de aquellos principios que promocionan la verdad como justicia, en favor de aquellos que promocionan la imparcialidad, la igualdad y la lealtad como justicia.

Obligación que de igual manera se encuentra contemplada en el artículo 78 de la misma codificación, en su numeral 10°, así:

ARTÍCULO 78. DEBERES DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS. Son deberes de las partes y sus apoderados:

(...)

10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir.

Lo anterior permite ver, que independientemente de la libertad probatoria con la que cuenta el juez laboral, es posible imponerles unas cargas a las partes, con el fin de adelantar el proceso de manera efectiva.

IV. CASO CONCRETO.

Como reseñamos la parte demandada solicitó como prueba en la contestación de la demanda, con el fin de conocer la situación legal de la demandante se oficie a, Migración Colombia para que informe que tramites ha realizado esta, desde hace cuánto tiempo y en que estados se encuentra; y al Ministerio de trabajo, para que acredite si reposa alguna solicitud de permiso de trabajo de la actora, desde hace cuánto tiempo y en qué estado se encuentra.

La juez de primera instancia con sustento en el artículo 173 del CGP negó la prueba exponiendo que dicha parte debía allegar la misma, o por lo menos acreditar que se interpuso la solicitud, argumento que comparte esta Sala de Decisión, en tanto, si quería hacer valer la información que se desprendía de dicha prueba, por su propia iniciativa pudo aportar esos medios, sin excusarse en el argumento que sabía que se la iban a negar, mostrando una falta de interés en su consecución.

A su vez, el artículo 173 del CGP debe ser leído en concordancia con el 78 numeral 10 de la misma codificación, en tanto es un deber de los litigantes «10. Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir».

Es por ello que la sola aseveración de la demandante en cuanto a que no solicitó la prueba dado que la situación migratoria de la demandante corresponde a una información reservada, se constituye en una mera apreciación o elucubración de la parte demandada, carente de respaldo. Decimos esto porque son las entidades Migración Colombia y Ministerio del Trabajo a quienes les correspondía determinar la pertinencia de suministrar la información, lo solicitado, pero se reitera, ni siquiera se intentó por la parte demandada obtener la información, desconociendo la carga que le compete.

De manera simple, encuentra este cuerpo colegiado que la negativa de esas pruebas se encuentra fundada y que la impugnación planteada no puede prosperar, razón por la que se confirmará la decisión de primera instancia.

Las costas de segunda instancia estarán a cargo de la parte demandada y en favor de la demandante, por la improsperidad del recurso, las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 divididos en partes iguales entre los demandados, esto es \$580.000 para el señor Edwin Alberto Saldarriaga Correa y \$580.000 para la masa sucesoral del señor Luis Carlos Correa García.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Itagüí, el 10 de noviembre de 2022, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por **Yajaira Nuria Nuñez Romero** en contra de **Edwin Alberto Saldarriaga Correa y Luis Carlos Correa García representado por su curador Edwin Alberto Saldarriaga Correa**, por lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: Las costas de segunda instancia se imponen a cargo de la parte demandada y en favor de la demandante, las agencias en derecho se fijan en \$1.160.000 divididos en partes iguales entre los demandados, esto es \$580.000

para el señor Edwin Alberto Saldarriaga Correa y \$580.000 para la masa sucesoral del señor Luis Carlos Correa García.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se firma en constancia.

Las magistradas;


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACECONSTAR

Que la presente providencia se notificó por estados N° 079
del 11 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>